COLOMBIA

Impactos humanitarios en los municipios de la frontera entre Nariño y Ecuador

HALLAZGOS CLAVE

- Entre enero de 2025 y julio de 2026, las disputas por el narcotráfico y la minería de oro generaron una emergencia humanitaria en la frontera entre Nariño y Ecuador. El accionar de los Grupos Armados No Estatales (GANE) cambió de los enfrentamientos masivos a restricciones a la movilidad de bajo perfil y a un control social arraigado, lo que contribuyó a una caída del 74% en los incidentes de protección reportados a nivel departamental entre enero y julio de 2026 y a un grave subregistro de la violencia.
- La crisis afecta de manera desproporcionada a los grupos étnicos, migrantes y refugiados. En 2025, los pueblos indígenas representaron el 84% del desplazamiento masivo en los municipios fronterizos. Los migrantes pendulares y refugiados que cruzan por rutas fronterizas informales enfrentan graves riesgos de extorsión, trata de personas y violencia sexual.
- La escalada de violencia de los grupos de delincuencia organizada (GDO) en las provincias fronterizas de Ecuador impulsa una creciente movilidad transfronteriza hacia Nariño, con 19,854 migrantes y refugiados registrados a julio de 2026 (88% solo en Ipiales), lo que presiona una respuesta humanitaria ya saturada.
- Los niños, niñas y adolescentes (NNA) enfrentan graves riesgos de reclutamiento, uso y explotación sexual. Los GANE recurren cada vez más a los niños para funciones de combate, vigilancia y microtráfico, mientras someten a las niñas a trabajo doméstico forzado, uniones tempranas y violencia basada en género (VBG).
- Los GANE instalan sistemáticamente minas antipersonales (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en los caminos rurales para imponer el control territorial y asegurar las rutas de contrabando. Se observa un uso incipiente de drones comerciales que transportan AEI, lo que genera malestar psicológico y restringe la movilidad de la población civil.
- La interferencia de los grupos armados y la financiación internacional fluctuante limitan el acceso humanitario y las capacidades de respuesta en la frontera entre Nariño y Ecuador. Los GANE aíslan a las comunidades rurales e indígenas mediante retenes físicos, toques de queda para el tránsito fluvial y la instalación de MAP a lo largo de rutas estratégicas.
- En septiembre de 2026, Estados Unidos descertificó el desempeño antinarcóticos de Colombia. Sumado a las políticas del nuevo Gobierno colombiano y al refuerzo de la coordinación militar entre Estados Unidos, Colombia y Ecuador, esto añade presión externa al viraje interno y podría desencadenar una escalada de la violencia de los GANE en la frontera.

ACERCA DE ESTE INFORME

Objetivo

Este informe analiza la crisis humanitaria en los seis municipios de Nariño que limitan con Ecuador: Barbacoas, Cuaspud (Carlosama), Cumbal, Ipiales, Ricaurte y Tumaco. Se examina cómo la violencia y las economías ilegales afectan a estas comunidades, teniendo en cuenta también el contexto en las provincias ecuatorianas vecinas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos para comprender las dinámicas transfronterizas que involucran a GANE y GDO.

El análisis cubre el periodo de enero de 2025 a julio de 2026 y se enfoca en los riesgos de protección, incluidas las restricciones a la movilidad, el desplazamiento, el reclutamiento y uso de NNA, y la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas, junto con los impactos en albergue, medios de vida, y acceso y respuesta humanitaria que los agravan.

Metodología

El análisis combina una revisión de fuentes cualitativas secundarias y conjuntos de datos. El análisis cuantitativo se basa principalmente en datos de OCHA, complementados con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Acción Integral contra Minas Antipersonal, Blumont y el Ministerio de Defensa Nacional para categorías específicas. El informe también se apoya en 15 entrevistas con informantes clave (EIC), incluidas 12 con organizaciones humanitarias y ONG que operan en Nariño y tres con aquellas que operan en provincias ecuatorianas fronterizas con Colombia.

Aunque otras zonas de Nariño registraron un mayor número de personas afectadas durante el periodo de análisis, los municipios seleccionados siguen estando comparativamente subdocumentados, por lo que este análisis busca fortalecer la base de evidencia para la respuesta humanitaria donde las necesidades son significativas, pero persisten los vacíos de información.

A lo largo de este informe, los grupos armados que operan en Colombia se denominan GANE, reflejando la terminología que utiliza el Gobierno colombiano. En Ecuador, los grupos equivalentes se denominan GDO. Esto refleja la clasificación oficial de cada país, no una diferencia en sus respectivas actividades.

Limitaciones y vacíos de información

Aunque el informe cubre el periodo de **enero de 2025 a julio de 2026**, la disponibilidad de datos varía según el indicador. Al momento de la recolección de datos, la información de OCHA y del Ministerio de Defensa Nacional estaba disponible hasta **julio de 2026**, mientras que las cifras de desplazamiento individual, amenazas, presencia de MAP y contaminación por municiones sin explotar (MSE) solo estaban disponibles hasta **junio de 2026.**

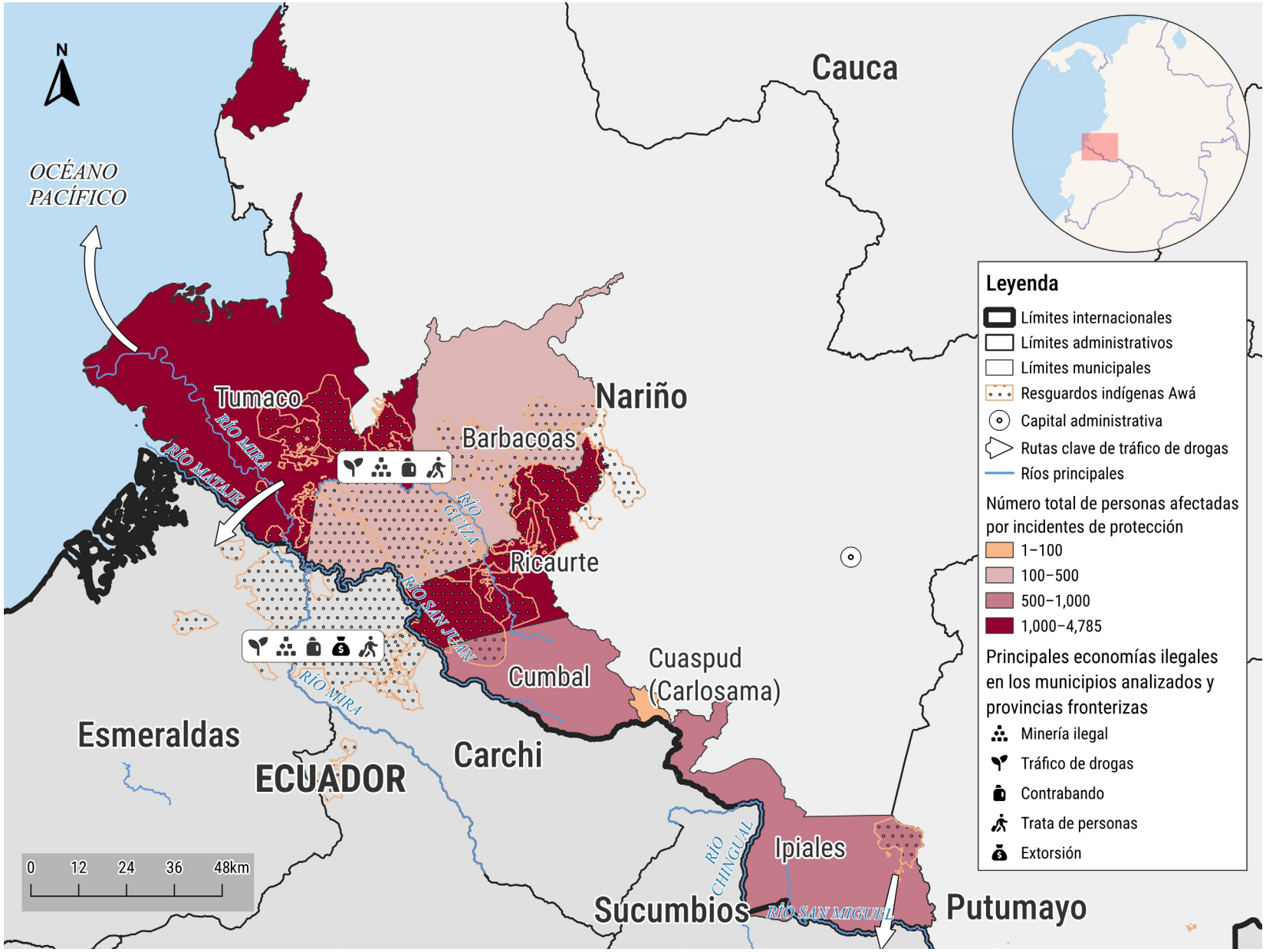
Los siguientes vacíos de información limitan el análisis.

- **Subregistro de los impactos de protección:** las cifras reportadas de ataques armados, confinamientos, desplazamiento masivo y restricciones a la movilidad siguen siendo bajas en comparación con las tendencias históricas (OCHA consultado 19/08/2026; ACAPS 05/09/2025). Las personas entrevistadas atribuyen esto en parte al miedo a las represalias y a la presión de los GANE para no reportar incidentes, particularmente en áreas afectadas por las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y distintos GANE. En Tumaco, por ejemplo, la presión para no desplazarse puede derivar en confinamientos no declarados (EIC 02/09/2026; EIC 28/08/2026 b).
- **Subregistro de preocupaciones específicas de protección:** el miedo a las represalias de los GANE, sumado a la impunidad de los perpetradores y a las preocupaciones sobre la confidencialidad al reportar ante las instituciones, disuade a sobrevivientes de denunciar la VBG y el reclutamiento y uso de NNA por parte de los GANE (EIC 27/08/2026; EIC 02/09/2026; EIC 28/08/2026 b; HRW 24/08/2026; OCHA/EHP 07/05/2026). Algunos casos de trata también pueden quedar fuera del monitoreo cuando los GANE trasladan a las víctimas sin contacto con las autoridades civiles ni con organizaciones humanitarias y de la sociedad civil (EIC 27/08/2026).
- **Cobertura geográfica desigual:** la información sobre necesidades e impactos humanitarios sigue siendo desigual entre los municipios priorizados. Ipiales y Tumaco cuentan con sistemas de información más desarrollados, lo que posiblemente refleja una mayor concentración de organizaciones de respuesta. La reducción de la financiación internacional desde 2025 ha afectado aún más la presencia y la capacidad operativa de las organizaciones (EIC 27/08/2026; EIC 01/09/2026 a).
- **Información limitada sobre poblaciones étnicas:** entre enero de 2025 y julio de 2026, el 56% de las personas afectadas fue reportado como no perteneciente a un grupo étnico o no contaba con información sobre pertenencia étnica (OCHA consultado 19/08/2026). Esto resulta llamativo, ya que las comunidades étnicas constituyen aproximadamente el 80% de la población del territorio, incluidas las comunidades afrocolombianas (49%) y los pueblos indígenas (31%) (DANE consultado 26/08/2026). Las fuentes cualitativas identifican a las comunidades étnicas entre las poblaciones con mayor riesgo de incidentes de protección, pero los datos limitados sobre pertenencia étnica restringen la evaluación de su magnitud (EIC 04/09/2026 c; EIC 28/08/2026 b; DRC 08/04/2025).

TABLA DE CONTENIDOS

Panorama de la crisis 4
Causantes de la crisis 5
Factores agravantes 6
Impactos humanitarios 9
Perspectiva 17

Mapa 1. Municipios fronterizos, total de personas afectadas por incidentes de protección e indicadores clave de economías ilícitas, enero de 2025 a julio de 2026



Fuentes: ACAPS con datos de OCHA (consultado 23/09/2026); OCHA (consultado 22/09/2026); Agencia Nacional de Tierras (consultado 14/09/2026); OCHA (consultado 19/08/2026); InSight Crime (25/06/2026); WWF (19/02/2018)

PANORAMA DE LA CRISIS

El departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, comparte una frontera muy porosa de 500km con las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. El departamento tiene una gran diversidad étnica y alberga siete pueblos indígenas y 75 consejos comunitarios afrocolombianos (OCHA/EHP 07/05/2026).

Entre enero de 2025 y julio de 2026, esta región fronteriza atravesó una grave emergencia humanitaria derivada de la convergencia de economías ilegales, choques climáticos como las inundaciones, flujos migratorios mixtos y la disminución de la financiación humanitaria (OCHA/EHP 07/05/2026; DRC 14/08/2025; EIC 01/09/2026 a). La frontera tiene un enorme valor estratégico para los GANE colombianos y los GDO ecuatorianos, que se disputan violentamente el control de corredores críticos que conectan los Andes con el océano Pacífico. Entre las principales fuentes de ingresos se encuentran la producción y el envío marítimo de cocaína, la minería ilegal de oro, el tráfico de armas, el contrabando y el control extorsivo de los pasos fronterizos informales (InSight Crime 25/05/2026).

La disputa por estas economías ilegales se traduce en un severo control territorial y social. Los GANE imponen una gobernanza paralela al Estado mediante medidas coercitivas, incluidos toques de queda, retenes ilegales, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas (OCHA/EHP 07/05/2026; ACAPS 05/09/2025; Pares 17/12/2025). En consecuencia, si bien Nariño registró más de 78,600 personas afectadas por eventos violentos entre enero y julio de 2025, de las cuales casi 6,700 estaban en los municipios fronterizos, en el primer semestre de 2026 los casos reportados a nivel departamental disminuyeron un 74%. En las áreas fronterizas, se reportaron casi 1,200 personas afectadas entre enero y julio de 2026 (OCHA consultado 19/08/2026).

Según las personas entrevistadas, esta caída estadística no indica una reducción de la violencia sino una evolución en las tácticas del conflicto (EIC 01/09/2026 a; EIC 28/08/2026 b). Los GANE confinan y amenazan deliberadamente a las poblaciones para evitar los desplazamientos masivos, con el fin de ocultar la crisis humanitaria. El miedo a las represalias y la desconfianza en las instituciones disuaden a las víctimas de denunciar, lo que podría llevar a una reducción en la oferta de servicios si las organizaciones de respuesta interpretan las cifras más bajas como una menor necesidad en lugar de ajustar sus enfoques para llegar a las poblaciones confinadas (EIC 28/08/2026 b).

Para afianzar aún más el control territorial, los GANE han introducido nuevas tácticas de guerra, como el uso incipiente de drones comerciales armados que transportan AEI, lo que genera un grave malestar psicológico entre la población civil (EIC 24/08/2026).

Impactos étnicos desproporcionados y dinámicas transfronterizas

Tabla 1. Proporción de población étnica (%) y población total migrante y refugiada en los municipios fronterizos

	Municipio	Indígenas	Afrocolombianos	Migrantes y refugiados (total)
1	Barbacoas	13.4%	80.2%	143
2	Cuaspud (Carlosama)	33.6%	0.7%	16
3	Cumbal	35.8%	60.3%	22
4	Ipiales	97.0%	0.1%	17,614
5	Ricaurte	77.8%	1.6%	91
6	Tumaco	95.4%	0.1%	1,968
7	Total	31.1%	48.6%	19,854

16 — 19,854

Nota: las proporciones de población étnica se basan en proyecciones oficiales de 2026, mientras que las cifras de población migrante y refugiada están actualizadas hasta julio de 2026.

Fuentes: ACAPS con datos de Migración Colombia (consultado 10/09/2026); DANE (consultado 26/08/2026)

Estos riesgos de protección afectan de manera desproporcionada a los grupos étnicos debido a su ubicación geográfica en áreas con baja presencia estatal, particularmente al pueblo indígena Awá y a las comunidades afrocolombianas que habitan en ambos lados de la frontera (OCHA consultado 19/08/2026).

Estas comunidades tampoco conciben el movimiento transfronterizo como migración internacional, sino como una movilidad ancestral esencial para la agricultura de subsistencia, la salud y la vida comunitaria, lo que dificulta su monitoreo (EIC 28/08/2026 b). Más allá de la movilidad ancestral, en la frontera miles de personas cruzan diariamente por el puente formal de Rumichaca y por cientos de trochas informales, incluidos migrantes pendulares y refugiados que huyen de la violencia en Ecuador y Venezuela (ACNUR 02/02/2026; EIC 07/09/2026).

CAUSANTES DE LA CRISIS

Economías ilegales y corredores estratégicos en la frontera

La reconfiguración de las economías ilegales y la fragmentación de los grupos armados en nuevas facciones sostienen y, en algunas áreas, incrementan los riesgos de protección en la frontera de Nariño, aun cuando avanzan las negociaciones de paz.

La frontera entre Colombia y Ecuador es uno de los principales corredores de tránsito de drogas del mundo, y conecta las áreas de producción en Nariño y Putumayo (Colombia) con Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos (Ecuador), desde donde la cocaína puede continuar hacia las rutas marítimas internacionales (Razón Pública 15/03/2026; InSight Crime 25/03/2026; HRW 24/08/2026).

Las economías ilegales incrementan la exposición de la población civil a la violencia porque el control de la producción de drogas, la minería ilegal y el tráfico transfronterizo depende del control del territorio y de las poblaciones que conectan el interior de Nariño con Ecuador y el Pacífico. Los municipios fronterizos forman parte de esta geografía interconectada: Tumaco brinda acceso a las rutas de tráfico del Pacífico; Barbacoas y Ricaurte conectan los territorios del interior; y Cumbal, Cuaspud (Carlosama) e Ipiales conectan a Nariño con Ecuador, principalmente a través de las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos (InSight Crime 25/08/2026). En 2024 se reportaron más de 31,000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca solo en Tumaco, lo que lo convierte en el municipio con las mayores plantaciones de coca de Colombia, mientras que la expansión de los GANE se ha asociado con el control de las rutas utilizadas para movilizar drogas, minerales y armas (UNODC 23/06/2026; DRC 08/04/2025 y 14/08/2025).

La caída de los precios de la coca por sobreproducción ha redirigido el interés hacia la minería de oro en Barbacoas, Linares y el Triángulo del Telembí, tendencia que también se observa al otro lado de la frontera, en Mayasquer y El Chical (EIC 02/09/2026; EIC 03/09/2026 b; Infobae 12/04/2026). Esta reconfiguración se ha intensificado en las subregiones de Guambuyaco y Abades, donde convergen los yacimientos minerales, las drogas y las rutas fronterizas, lo que ha puesto bajo control de los GANE minas antes independientes y ha incrementado la competencia armada por sus ingresos (EHP/OCHA 07/05/2026; Pares 07/04/2026). El oro se moviliza en pequeñas cantidades (30–40g) hacia otros departamentos para su exportación, lo que lo hace más rentable y de menor riesgo que la cocaína (EIC 04/09/2026 b). Pese a ello, los flujos de cocaína se reanudaron tras un colapso de precios a inicios de año, sostenidos por alianzas entre GANE colombianos y GDO ecuatorianos, incluidos Los Lobos y Los Choneros (EIC 04/09/2026 b; DP 07/10/2025; SWI 17/05/2025).

Las economías ilegales dependen cada vez más de la participación forzada de la población civil. Los GANE imponen pagos para la extracción de madera, la cosecha y el procesamiento de hoja de coca, la minería ilegal y el microtráfico de drogas (EIC 03/09/2026 b; EIC 24/08/2026; HRW 24/08/2026). En las zonas de cultivo, se ofrecen a las comunidades pagos de aproximadamente USD 500 al mes para forzar su participación en actividades ilegales, aprovechando vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes (Infobae 09/08/2025).

El control sobre las rentas criminales está directamente ligado a la 'gobernanza de facto', término que la Defensoría del Pueblo utiliza para referirse a un sistema paralelo de autoridad mediante el cual los GANE regulan la vida cotidiana de la población civil, principalmente a través de códigos de conducta y toques de queda, el control del comercio local, la cooptación del liderazgo comunitario y la provisión de infraestructura o servicios, como la administración de justicia, las relaciones económicas y el uso de la tierra y los recursos (DP 07/10/2025). El contrabando y la extorsión a la pesca artesanal y a la agricultura ilustran además cómo la diversificación económica sostiene el control armado y reduce la movilidad de las personas y el acceso a medios de vida y a la asistencia (DRC 08/04/2025; El Colombiano 22/01/2026; ACAPS 05/09/2025).

Esta misma relación se observa en la frontera con Ecuador. El 13 de abril de 2026, las autoridades en Cuaspud (Carlosama), en Nariño, capturaron a dos presuntos líderes de redes de apoyo de un GANE, incluido el jefe de finanzas de la comisión de la estructura que opera en la frontera, lo que ilustra cómo la presencia de los

grupos armados en la frontera sostiene la financiación de la actividad de los GANE (Radio Ipiales 13/04/2026). En la zona fronteriza de Cumbal–Mayasquer, la minería ilegal de oro se ha expandido junto con la influencia armada, mientras que las personas entrevistadas indicaron que los hogares al otro lado de la frontera, en Carchi, podrían ser forzados a almacenar drogas, armas y contrabando (EIC 03/09/2026 b).

La dependencia de múltiples economías ilegales permite a los GANE adaptarse a la presión sobre fuentes de ingreso individuales y traslada la competencia hacia nuevas comunidades y rutas, lo que genera nuevos desplazamientos, restricciones a la movilidad, contaminación por MSE, reclutamiento de NNA y extorsión, especialmente en la zona del Pacífico.

Fragmentación de los GANE y fragilidad de las negociaciones de paz

La fragmentación y reconfiguración de los GANE sostienen e incrementan los riesgos de protección en la frontera de Nariño pese a las negociaciones de paz. Dos procesos de paz territorial estuvieron activos en Nariño durante el primer semestre de 2026. Uno involucró a un GANE que negociaba con el Gobierno y se centraba en diez municipios, incluidos Barbacoas, Cumbal y Ricaurte en el departamento de Nariño (InSight Crime 09/04/2025). El segundo involucró a una coalición de grupos disidentes que operan en Nariño y Putumayo y al Gobierno, particularmente en relación con Tumaco y la zona fronteriza sur alrededor de Ipiales (El Colombiano 21/04/2026).

Aunque las organizaciones humanitarias no reportaron indicadores oficiales de confinamientos y desplazamientos durante el primer semestre de 2026, lo que coincidió con las negociaciones de paz, las personas entrevistadas indicaron que la violencia continuó pese a los avances reportados en la dejación de armas, el desminado territorial y un acuerdo para sustituir las plantaciones de coca por cultivos legales (Consejería Comisionada de Paz 09/02/2026). No hay información suficiente para atribuir la reducción de los incidentes de protección reportados únicamente a las negociaciones de paz, ya que nuevos GANE mantienen presencia en las áreas circundantes y podrían seguir causando desplazamiento y confinamiento, con un paso de impactos masivos a impactos individuales y una disminución de los reportes (EIC 28/08/2026 b; EIC 28/08/2026 a; InSight Crime 09/04/2025; Gobernación de Nariño 30/04/2026).

La fragmentación reiterada, los cambios de liderazgo y la expansión territorial han generado inestabilidad, mientras que la competencia por los corredores estratégicos en el Pacífico se asocia con un mayor uso de AEI (DRC 08/04/2025; OCHA consultado 19/08/2026). El 20 de abril de 2026, un GANE atacó a las fuerzas militares con drones cargados de explosivos en la zona rural de Ipiales y mató a tres soldados e hirió a otros dos. El Gobierno declaró posteriormente que el ataque había roto los compromisos de no agresión y puesto en riesgo el proceso de paz, principalmente para los municipios de Barbacoas, Cumbal y Ricaurte (Pares 24/04/2026; Gobernación de Nariño 30/04/2026). Esta reconfiguración incrementa los riesgos de protección en la frontera entre Colombia y Ecuador (OCHA 30/03/2026).

FACTORES AGRAVANTES

Más allá de la violencia armada, tres factores agravan la situación humanitaria en la frontera entre Nariño y Ecuador: las amenazas naturales y la variabilidad climática, el deterioro del agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) y la crisis de seguridad en Ecuador. Ninguno actúa de manera aislada; cada uno profundiza la vulnerabilidad de poblaciones ya afectadas por el conflicto armado y el control de los GANE.

Amenazas naturales y variabilidad climática

Los choques ambientales en Nariño afectan de manera desproporcionada a las comunidades ya confinadas o desplazadas por el conflicto armado, pues suelen ubicarse en territorios dispersos cercanos a los cultivos y a las fuentes naturales de agua. En 2025, las amenazas naturales y el conflicto armado afectaron simultáneamente a casi 7,000 personas en Nariño (OCHA/EHP 07/05/2026).

Si bien las lluvias intensas caracterizaron 2025 e inicios de 2026, el perfil de riesgo cambia rápidamente hacia una sequía grave entre septiembre y diciembre (Gobernación de Nariño 31/08/2026; OCHA 06/11/2025 y 29/01/2026). A inicios de 2025, el aumento de las lluvias afectó a más de 15,400 personas en los municipios fronterizos de Barbacoas y Tumaco. Las inundaciones destruyeron cultivos de subsistencia y mataron animales de cría, mientras que los deslizamientos dañaron infraestructura crítica, como el acueducto que suministra agua a unas 500 personas en Barbacoas (OCHA 20/02/2025).

A septiembre de 2026, las condiciones de El Niño han elevado las temperaturas superficiales del mar por encima del promedio en el océano Pacífico, lo que suele intensificar la temporada seca en Colombia (NOAA consultado 31/08/2026). Los pronósticos indican una probabilidad superior al 70% de temperaturas por encima de lo normal y déficits severos de lluvia en la región fronteriza entre Nariño y Ecuador entre septiembre y noviembre de 2026, con 38 de los 64 municipios de Nariño (59%) en alto riesgo (IRI consultado 31/08/2026). Tumaco enfrenta un grave riesgo de escasez aguda de agua y de racionamiento (3iS et al. 19/07/2026).

Anomalías climáticas transfronterizas: las condiciones de El Niño se manifiestan de manera distinta a cada lado de la frontera, lo que crea riesgos combinados para los refugiados colombianos y los migrantes pendulares. En Ecuador, El Niño suele intensificar la temporada de lluvias (ACAPS 23/07/2023; Infobae 19/08/2026). Mientras los Andes colombianos enfrentan sequía, en las cuencas transfronterizas de Sucumbíos (Ecuador) aumenta considerablemente el caudal de los ríos San Miguel y Putumayo. Las lluvias intensas y las inundaciones directas en estas áreas arrasan los bienes de los hogares, amenazan la infraestructura crítica y afectan a comunidades conformadas en su mayoría por colombianos que cruzaron recientemente la frontera hacia Ecuador y carecen de albergue (EIC 07/09/2026). Simultáneamente, en la provincia costera de Esmeraldas, el calentamiento de los océanos plantea un riesgo inminente de aumento del nivel del mar e inundaciones graves en zonas bajas del cantón San Lorenzo, que ocurren aproximadamente cada 14 días y se intensifican durante la temporada de lluvias (diciembre–mayo) y los ciclos de El Niño. Esta amenaza ambiental es especialmente preocupante porque estas zonas costeras expuestas son precisamente donde tienden a asentarse los refugiados colombianos y venezolanos recién llegados, lo que los deja atrapados entre la violencia armada en Colombia y los choques climáticos en Ecuador (EIC 08/09/2026).

Riesgos sísmicos: el 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7.4 en Chocó afectó a 15 departamentos a nivel nacional. Al 9 de septiembre, Nariño registró más de 329 personas, 400 viviendas y 40 instalaciones escolares afectadas por el sismo, incluidos los municipios fronterizos de Barbacoas y Ricaurte (Gobernación de Nariño 11/08/2026; 3iS consultado 09/09/2026). Este evento agrava las necesidades de medios de vida y albergue, sectores ya afectados por el conflicto.

Acceso al agua y contaminación

Las deficiencias en WASH agravan severamente la crisis humanitaria impulsada por los GANE en la frontera. La contaminación ambiental, la infraestructura dañada y las amenazas naturales cortan el acceso al agua segura, lo que empeora la situación de salud por las enfermedades transmitidas por el agua e incrementa los riesgos de protección al atrapar a la población civil en áreas confinadas sin servicios básicos (3iS et al. 11/08/2026 y 19/06/2026).

Según una persona entrevistada, durante las sequías de 2025–2026, las comunidades rurales de Tumaco dependieron directamente del agua de los ríos contaminada con mercurio proveniente de la minería ilegal y con químicos del procesamiento de coca, lo que causó enfermedades gastrointestinales y de la piel (EIC 28/08/2026 b; Charkiewicz et al. 05/03/2025). En junio de 2026, en Jardines de Sucumbíos (Ipiales), líderes indígenas y afrocolombianos reportaron acueductos averiados y la falta de agua segura como sus necesidades más urgentes. Las MSE y las restricciones a la movilidad impiden no solo las reparaciones de infraestructura, sino también el acceso para el transporte de agua en carrotanques y las intervenciones de cloración, lo que deja a las comunidades afectadas sin una fuente de agua segura fija ni provisional (OCHA/EHP 10/06/2026; EIC 01/09/2026 a; EIC 28/08/2026 a).

La degradación ambiental causada por el ser humano presiona aún más la disponibilidad de agua. En 2026, los incendios forestales han afectado 60 hectáreas de bosque en Cumbal, lo que ha destruido la vegetación nativa y agravado la escasez y la contaminación del agua (ET 27/08/2026; EIC 28/08/2026 a). Esto afecta directamente a municipios como Ipiales, que depende del río Blanco, que nace en Cumbal. El río ya presenta una grave contaminación por mataderos no regulados, industrias lácteas y aguas residuales domésticas. En consecuencia, en agosto de 2026, el instituto departamental de salud de Nariño declaró el agua de Ipiales no apta para el consumo humano debido a altas cargas bacterianas y a la falta de cloro residual (HSB 07/08/2026; EIC 28/08/2026 a). En barrios periféricos como Puenes, esta mala calidad del agua ha causado brotes de enfermedades diarreicas agudas entre la población local, los migrantes y los refugiados (EIC 01/09/2026 a).

Movilidad humana impulsada por los riesgos de protección de la crisis en Ecuador

La escalada de violencia en Ecuador causada por los GDO agrava la crisis fronteriza al generar nuevos flujos migratorios hacia Nariño, lo que añade presión al sistema de respuesta humanitaria. Entre enero de 2025 y julio de 2026, las provincias ecuatorianas de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos registraron 780 homicidios (22, 561 y 197, respectivamente) atribuidos principalmente a los GDO (MinInterior consultado 28/08/2026; Mindefensa 16/09/2026). Esta violencia tiene su origen en la disputa por el control de las rutas de tráfico de cocaína, oro y combustible a lo largo de la frontera (InSight Crime 25/03/2026; EIC 28/08/2026 b).

La movilidad humana de Ecuador hacia Colombia ha aumentado: a julio de 2026 se habían registrado 19,854 migrantes y refugiados (incluidos migrantes pendulares) en los municipios fronterizos de Colombia, concentrados sobre todo en Ipiales, con el 88% (17,614) del total, y Tumaco, con el 10% (1,968), debido a su cercanía a la frontera y a los pasos de cruce (Migración Colombia consultado 10/09/2026) A medida que los GDO ecuatorianos incrementan los enfrentamientos con los GANE colombianos por el control de la frontera, y Ecuador continúa sin un marco legal que reconozca el desplazamiento interno, las familias amenazadas cuentan con pocos mecanismos de protección dentro del país, lo que impulsa los cruces fronterizos en busca de protección internacional (EIC 08/09/2026; EIC 26/08/2026; RID 11/07/2025).

Los factores que impulsan la movilidad humana varían según la provincia de origen. En Esmeraldas, las disputas territoriales entre GDO por los corredores urbanos de tráfico de drogas y oro han llevado a toques de queda y cierres comerciales en San Lorenzo y Eloy Alfaro, junto con el reclutamiento de niñas afroecuatorianas e indígenas como parejas forzadas y el aumento de las tasas de femicidio y violencia sexual (EIC 02/09/2026; EIC 08/09/2026; EIC 26/08/2026; InSight Crime 25/03/2026).

En Sucumbíos, la extorsión, los homicidios y el desplazamiento vinculados a la minería ilegal de oro en las cuencas de los ríos impulsan cruces por rutas fluviales controladas por los GANE, los mismos corredores utilizados para el tránsito de cocaína hacia Esmeraldas, donde mujeres y NNA enfrentan reclutamiento para el transporte de drogas y armas (EIC 07/09/2026). Los migrantes de Carchi, Guayas y Manabí reportan robo de dispositivos electrónicos, extorsión y amenazas de reclutamiento contra adolescentes como razones de salida, así como la VBG cometida por integrantes de los GDO ecuatorianos (EIC 03/09/2026 b; EIC 26/08/2026; DRC 19/02/2026).

Los casos documentados de reubicación ilustran la magnitud de estos impactos. Tras un homicidio en San Lorenzo (Ecuador) atribuido a un GANE, 16 familias ecuatorianas y binacionales fueron desplazadas hacia el municipio colombiano de El Charco y 12 personas hacia Ipiales, en Nariño, y posteriormente reubicadas en el departamento del Valle del Cauca en el marco de la ruta de protección (OCHA 09/04/2026; OCHA 09/04/2026 b).

La relación no es unidireccional; los colombianos de Nariño que se desplazan hacia Ecuador enfrentan una exposición comparable a la violencia de los GDO, lo que indica que el control de los grupos se extiende a ambos lados de la frontera en lugar de concentrarse en un solo lado. Esto expone a las poblaciones refugiadas y migrantes a la doble carga del conflicto y la migración e incrementa sus necesidades humanitarias (EHP/OCHA 06/05/2026; EIC 26/08/2026).

La llegada de personas de otros países añade presión. En 2026, Nariño acoge a migrantes y refugiados principalmente de Venezuela, pero también de Chile, República Dominicana y Perú, lo que incrementa la necesidad de albergue humanitario, alimentos y asistencia en protección en un lugar con una respuesta ya limitada y saturada (Migración Colombia 15/07/2026; ACNUR 02/02/2026; EIC 26/08/2026).

IMPACTOS HUMANITARIOS

Protección

Confinamientos y restricciones a la movilidad

Tabla 2. Número reportado de personas afectadas por confinamiento y restricciones a la movilidad, enero de 2025 a julio de 2026

	Municipio	Confinamiento	Restricciones a la movilidad
1	Cumbal	0	100
2	Ipiales	469	0
3	Ricaurte	0	10
4	Tumaco	191	3,300

Personas afectadas

0 3,300

Nota: solo se muestran los municipios con personas afectadas reportadas.

Fuente: ACAPS con datos de OCHA (consultado 19/08/2026)

En la frontera entre Nariño y Ecuador, los GANE pasan del confinamiento masivo a restricciones a la movilidad permanentes y de bajo perfil. Esto les permite mantener un estricto control social mientras evitan la escalada militar, lo que hace que las cifras oficiales disminuyan aun cuando el control aumenta (DRC 19/02/2026; EIC 01/09/2026 a). Los confinamientos y las restricciones a la movilidad se han convertido en los principales instrumentos de cooptación territorial utilizados para asegurar las rutas de contrabando de drogas y armas, proteger los enclaves de minería ilegal de oro e impedir el avance de grupos rivales o de la fuerza pública (ACAPS 10/07/2025; EIC 03/09/2026 b). Para imponer el control territorial, los GANE también instalan sistemáticamente MAP y AEI en caminos rurales, puntos de acceso al agua y parcelas agrícolas (DRC 08/04/2025). En 2026, la presencia constante de los GANE y el hallazgo de MSE provenientes de Ecuador continúan restringiendo la movilidad de las comunidades por los caminos ancestrales (EHP/OCHA 10/06/2026).

A nivel departamental, Nariño registró un aumento marcado de las restricciones a la movilidad entre enero y julio de 2025 y el mismo periodo de 2026, mientras que los confinamientos se mantuvieron relativamente estables. Los confinamientos afectaron a casi 1,400 personas entre enero y julio de 2025, frente a más de 1,100 durante el mismo periodo de 2026. En contraste, el número de personas afectadas por restricciones a la movilidad aumentó más del doble, de 3,600 a 7,900 (OCHA consultado 19/08/2026).

En los municipios fronterizos de Ipiales y Tumaco se reportaron 660 personas confinadas entre enero y julio de 2025. Durante el mismo periodo, las restricciones a la movilidad afectaron a 3,400 personas, de las cuales 3,300 estaban en Tumaco y 100 en Cumbal. En contraste, no se reportaron oficialmente confinamientos en los municipios fronterizos entre enero y julio de 2026, mientras que las restricciones a la movilidad afectaron solo a diez personas en Ricaurte, lo que las personas entrevistadas atribuyen al control social arraigado y al subregistro más que a una disminución real de la violencia (OCHA consultado 19/08/2026; EIC 01/09/2026 a; EIC 28/08/2026 b). Las comunidades suelen ser confinadas antes de verse forzadas a desplazarse; cuando las organizaciones de respuesta atienden estos casos, solo se registra el desplazamiento, por lo que el confinamiento previo queda sin registrar (EIC 28/08/2026 b).

Estos eventos afectan de manera desproporcionada a las comunidades étnicas en áreas fronterizas remotas. En 2025, de las 660 personas afectadas por confinamiento en Ipiales y Tumaco, el 57% era afrocolombiana y el 43% indígena. De las 3,400 personas afectadas por restricciones a la movilidad en los municipios fronterizos ese año, las 100 personas afectadas en Cumbal fueron identificadas como indígenas, mientras que la información sobre la identidad étnica de las 3,300 personas restantes sigue sin estar disponible, lo que limita la evaluación de la medida en que las restricciones a la movilidad afectan a los distintos grupos étnicos (OCHA consultado 19/08/2026). Los GANE también imponen confinamientos y restricciones a la movilidad durante eventos políticos críticos. Según las personas entrevistadas, durante la primera (31 de mayo) y la segunda (21 de junio) vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, múltiples áreas rurales de Tumaco fueron confinadas durante al menos dos semanas, y se prohibió por completo la movilidad de la población civil (EIC 24/08/2026; EIC 28/08/2026 b).

Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes

Los NNA enfrentan graves riesgos de reclutamiento por parte de los GANE en la frontera entre Nariño y Ecuador. Según las personas entrevistadas, en 2026, los municipios que limitan con Ecuador o que sirven como corredores de tránsito, como Barbacoas, Cumbal, Ipiales y Tumaco, son focos de reclutamiento y uso por parte de los GANE (EIC 27/08/2026; EIC 01/09/2026 a).

Los GANE aprovechan las vulnerabilidades económicas y usan las redes sociales para reclutar a menores de edad. Según el monitoreo de organizaciones locales, los altos pagos por la cosecha de cultivos ilícitos, de hasta USD 160 por día, provocaron un pico en los casos de reclutamiento entre septiembre y octubre de 2025 (EIC 24/08/2026; EIC 01/09/2026 b). En Barbacoas y Sanquianga, los grupos pagan a los NNA alrededor de USD 1.60 por capturar animales silvestres para el tráfico transfronterizo como otra fuente de ingresos ilegales (EIC 24/08/2026). En el plano digital, los GANE usan plataformas como Facebook y TikTok para proyectar poder y enviar ofertas laborales engañosas mediante mensajes directos a NNA desde los 15 años (EIC 01/09/2026 b). En 2025, el 44% de los NNA reclutados en Colombia fue contactado a través de estas plataformas (HRW 24/08/2026).

El reclutamiento y uso de NNA implica patrones diferenciados por género. Los GANE utilizan a los niños para la vigilancia comunitaria y militar, el microtráfico de drogas y el manejo de explosivos y drones (HRW 24/08/2026). En Cumbal e Ipiales, los NNA que venden drogas en las escuelas por encargo de los GANE encuentran en ello una puerta de entrada a su reclutamiento para funciones de combate (EIC 01/09/2026 a). Ante la creciente importancia de la infraestructura minera de oro para los GANE en Colombia a inicios de 2026, los niños también son forzados a transportar mineral de oro pesado a través de cañones de río de 20–25m mediante sistemas artesanales de poleas (EIC 03/09/2026 b). En cambio, a las niñas los GANE las captan mediante el reclutamiento coercitivo: ejercen una presión gradual para forzarlas al trabajo doméstico y a funciones de inteligencia, y terminan exponiéndolas a la violencia sexual y al feminicidio (HRW 24/08/2026; DRC 19/02/2026; EIC 08/09/2026).

Los grupos armados reubican sistemáticamente a los NNA reclutados para evitar fugas, aislar a las víctimas, romper sus vínculos comunitarios e incrementar su dependencia económica del GANE. De los NNA reclutados identificados en Nariño en 2025, el 51% fue trasladado al Cauca (OCHA 07/05/2026; HRW 24/08/2026). Debido al miedo a las represalias, estos casos presentan un importante subregistro (EIC 28/08/2026 b). Como estrategia de supervivencia, muchas familias se ven forzadas a enviar a los adolescentes mayores de 14 años a ciudades como Cali o Pasto para escapar del reclutamiento (EIC 02/09/2026).

Desplazamiento

Los enfrentamientos entre GANE por los corredores estratégicos impulsan cambios en las dinámicas de desplazamiento en la frontera entre Nariño y Ecuador. Si bien el desplazamiento masivo disminuyó a inicios de 2026, una tendencia creciente de desplazamiento individual indica un viraje hacia la violencia selectiva y un mayor control social, lo que presiona las capacidades locales de albergue y de respuesta (OCHA consultado 19/08/2026; Blumont consultado 25/08/2026).

Desplazamiento masivo

En 2025, Nariño fue uno de los departamentos con más desplazamiento en Colombia, con el 7.3% del total nacional. Los grupos étnicos se vieron afectados de forma desproporcionada: las comunidades afrocolombianas representaron el 59% de la población desplazada, los pueblos indígenas (incluidos los Awá, Eperara Siapidara, Pastos y Quillasinga) el 25%, y las comunidades rurales mestizas el 11% (OCHA/EHP 07/05/2026).

En los municipios fronterizos, el desplazamiento masivo afectó a casi 1,300 personas en 2025, fuertemente concentrado en Ipiales, Ricaurte y Tumaco. Los pueblos indígenas representaron el 84% (casi 1,100 personas) de estos casos. Entre enero y julio de 2026, el desplazamiento masivo cayó marcadamente a 174 personas, registradas solo en Barbacoas y Ricaurte. Las 174 personas afectadas eran indígenas (OCHA consultado 19/08/2026). Esta disminución probablemente refleja subregistro más que una caída real del desplazamiento.

El desplazamiento masivo sigue estrechamente vinculado a los movimientos transfronterizos. En abril de 2025, las incursiones de los GANE en Jardines de Sucumbíos (Ipiales) desplazaron a casi 190 personas (38 familias), que huyeron hacia áreas urbanas, Putumayo o al otro lado de la frontera, hacia Ecuador (OCHA 09/04/2025). Entre el 16 y el 17 de marzo de 2026, homicidios separados

en el resguardo Tortugaña Telembí (Barbacoas) y en San Lorenzo (Ecuador) desencadenaron amenazas y medidas de control social. Esto forzó al pueblo indígena Awá a dispersarse en las zonas rurales de Barbacoas y Ricaurte y llevó a familias ecuatorianas a huir de San Lorenzo hacia El Charco e Ipiales, lo que requirió su traslado inmediato al departamento del Valle del Cauca para su protección (OCHA 30/03/2026).

Tabla 3. Personas reportadas afectadas por desplazamiento masivo, enero de 2025 a julio de 2026

	Municipio	Indígenas	Afrocolombianos	Desconocido/otro
1	Barbacoas	0	108	0
2	Ipiales	189	0	14
3	Ricaurte	0	806	0
4	Tumaco	0	346	0

Personas afetadas

0 806

Created with Datawrapper

Nota: solo se muestran los municipios con personas afectadas reportadas.

Fuente: ACAPS con datos de OCHA (consultado 19/08/2026)

Desplazamiento individual

En 2025, el desplazamiento individual afectó a más de 11,100 personas en Nariño. De estas, más de 4,200 estaban en municipios fronterizos, y Tumaco concentró el 68% (casi 2,900 personas) del total fronterizo. Las comunidades afrocolombianas fueron las más afectadas en esta zona, con casi 2,300 personas (Blumont consultado 25/08/2026).

Entre enero y junio de 2026, el desplazamiento individual en la zona fronteriza se redujo a algo más de 1,500 personas. Pese a una caída del 72% en Ipiales, el desplazamiento individual sigue siendo significativamente mayor que el desplazamiento masivo en la región. Esta tendencia sugiere que los GANE fuerzan cada vez más a las familias a huir de manera individual en lugar de en grandes grupos para evitar su detección (EIC 28/08/2026 a; EIC 01/09/2026 a). Las comunidades afrocolombianas fueron las más afectadas por el desplazamiento individual en el primer semestre de 2026 (más de 700 personas), seguidas de los pueblos indígenas (más de 350) (Blumont consultado 25/08/2026). Los datos disponibles no se desagregan por situación posterior al desplazamiento, lo que deja sin documentar si estas personas llegan a comunidades de acogida, a asentamientos informales o retornan poco después de huir, lo cual constituye un vacío de información para la focalización humanitaria.

La escalada de violencia en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, así como en cantones como Guayaquil y Manta, también desplazó a familias al otro lado de la frontera, hacia Colombia. En 2026, una organización humanitaria en Ipiales y Pasto recibió de tres a cinco familias ecuatorianas al mes en sus albergues, una tendencia prácticamente inexistente en 2025 (EIC 27/08/2026). Al mismo tiempo, hogares ecuatorianos y binacionales llegan cada vez más de forma individual al centro urbano de Tumaco, huyendo de la persecución transfronteriza y solicitando el estatus formal de refugiado (EIC 28/08/2026 b).

Tabla 4. Personas reportadas afectadas por desplazamiento individual, enero de 2025 a junio de 2026

	Municipio	Indígenas	Afrocolombianos	Desconocido/otro
1	Barbacoas	127	424	156
2	Cumbal	35	0	9
3	Ipiales	98	48	249
4	Ricaurte	426	22	178
5	Tumaco	325	2	1

Personas afectadas

0 — 426

Nota: la tabla presenta las personas registradas como afectadas por desplazamiento individual, según el municipio donde ocurrió el desplazamiento. Solo se muestran los municipios con personas afectadas reportadas.

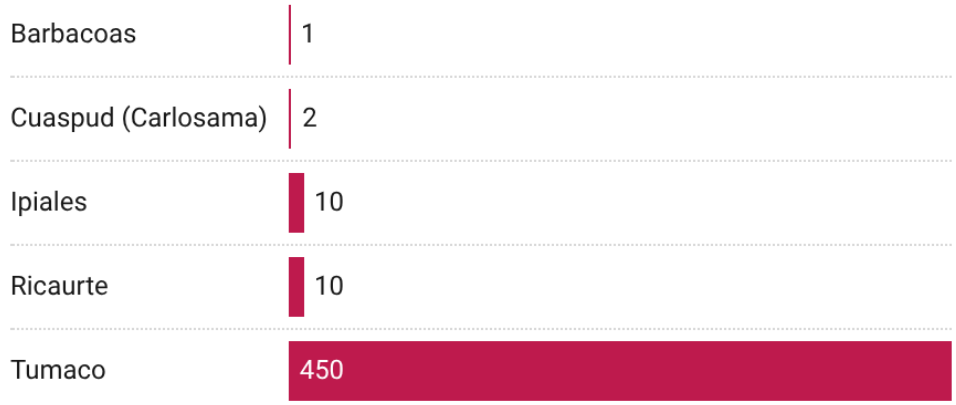
Fuente: ACAPS con datos de Blumont (consultado 25/08/2026)

Control social, amenazas y extorsiones

Si bien el número de personas afectadas por control social en Nariño ha disminuido, los eventos registrados en los municipios fronterizos han aumentado y se han extendido a un área geográfica más amplia, lo que indica una profundización y no una disminución del control territorial de los GANE. El control social de los GANE es el mecanismo mediante el cual ejercen su poder sobre las comunidades para administrar el territorio y sus economías ilegales. Esto puede darse mediante prácticas coercitivas que persisten incluso en ausencia de confrontación abierta, lo que dificulta registrarlo únicamente mediante el reporte de eventos (DP 07/10/2025).

Entre enero y julio de 2025 y el mismo periodo de 2026, la cantidad de personas afectadas por control social en Nariño disminuyó un 5.4%, con dos eventos registrados (uno en Tumaco). Para los municipios fronterizos, sin embargo, se registró un aumento del 37%: los eventos pasaron de uno entre enero y julio de 2025 a seis en el mismo periodo de 2026 y se extendieron geográficamente a Barbacoas, Ipiales, Cuaspud y Tumaco con un evento cada uno y Ricaurte con dos eventos (OCHA consultado 19/08/2026).

Tabla 5. Personas reportadas afectadas por control social, enero de 2025 a julio de 2026



Nota: solo se muestran los municipios con personas afectadas reportadas.

Fuente: ACAPS con datos de OCHA (consultado 19/08/2026)

Los toques de queda y los códigos de conducta constituyen los mecanismos centrales de control. En Barbacoas y la zona rural de Tumaco, los GANE imponen horarios obligatorios de circulación, con restricciones nocturnas que se endurecieron entre 2025 y 2026, ya que pasaron de comenzar alrededor de las 20:00 a hacerlo entre las 18:00 y las 19:00, y se hacen cumplir mediante sanciones económicas y amenazas por incumplimiento (DP 16/02/2026; DRC 28/02/2025; EIC 24/08/2026). Los grupos armados también imponen límites de velocidad y restricciones al uso de cascos de motocicleta para la vigilancia de la población que se moviliza en el territorio, junto con carnés de identificación obligatorios y censos poblacionales

no oficiales, a menudo realizados en periodos electorales, como en los municipios de Policarpa y El Peñol en mayo de 2026 (ACAPS 05/09/2025; Infobae 31/05/2026; EIC 24/08/2026; DP 07/10/2025).

El control también se extiende a la vida privada y comunitaria mediante restricciones a la información y vigilancia. En 2026, la población civil podía encontrarse con hasta cinco retenes controlados por distintos GANE en un mismo corredor, donde se inspeccionan los teléfonos con cables y software especializado para extraer llamadas, chats y datos de redes sociales. También usan drones equipados con explosivos para la vigilancia y la intimidación (ACAPS 05/09/2025; EIC 24/08/2026). En Barbacoas, Ricaurte y Tumaco se reportan aumentos de amenazas y marcación de viviendas, junto con prohibiciones a los líderes comunitarios de mediar en nombre de los residentes, lo que debilita los mecanismos locales de protección y refleja una coerción más amplia sobre la Junta de Acción Comunal (una organización de base legalmente reconocida en Colombia para representar los intereses de los residentes) y las autoridades étnicas (ACAPS 05/09/2025).

La extorsión funciona como castigo y como mecanismo para que los GANE impongan sus propias reglas y su control social. Cobran multas de aproximadamente USD 1,600 a quienes rompen esas reglas o para dirimir disputas, lo que puede forzar desplazamientos individuales y agrava el control económico de los GANE sobre los precios de los alimentos, la pesca y la agricultura (EIC 28/08/2026 b). Las consecuencias se extienden a suspensiones escolares prolongadas, cierres de puestos de salud rurales y acceso restringido para las misiones humanitarias de salud, junto con daños psicosociales derivados de la hipervigilancia constante (EHP/OCHA 07/05/2026; DRC 14/08/2025).

Estas dinámicas arraigadas afectan de manera desproporcionada a las comunidades afrocolombianas y Awá, a los líderes y a los comerciantes, quienes evitan denunciar por miedo a las represalias. Solo entre enero y julio de 2026, las comunidades afrocolombianas concentraron el 91.6% (250/273) de los casos registrados, lo que indica un impacto geográfico y étnico más amplio pese a un número relativamente estable de personas afectadas (OCHA consultado 19/08/2026).

Riesgos de artefactos explosivos (MAP, AEI y MSE)

Tabla 6. Eventos reportados relacionados con MAP/MSE, enero de 2025 a junio de 2026

	Municipio	Accidentes con MAP/MSE	Eventos de desminado	Total
1	Barbacoas	0	10	10
2	Cumbal	1	0	1
3	Ipiales	0	5	5
4	Ricaurte	0	2	2
5	Tumaco	1	21	22

Nota: solo se muestran los municipios con eventos reportados.

Fuente: ACAPS con datos de AICMA (31/07/2026)

Después del Cauca, Nariño registró el segundo mayor número de eventos por MAP y MSE en Colombia en 2025, con al menos 136 incidentes. Los eventos reportados en el departamento disminuyeron un 70%, de 79 entre enero y junio de 2025 a 23 en el mismo periodo de 2026. En los seis municipios analizados, la disminución fue menor, de nueve a ocho eventos (12%). Tumaco y Barbacoas concentraron los nueve eventos reportados en los municipios entre enero y junio de 2025 y registraron cuatro eventos menos en el mismo periodo de 2026, una disminución del 44% (AICMA 31/07/2026). La disminución debe interpretarse con cautela, ya que las entrevistas indican que puede reflejar en parte un subregistro vinculado al miedo a las represalias de los GANE y a una mayor conciencia sobre los riesgos de los artefactos explosivos gracias a la educación en el riesgo de minas (EIC 04/09/2026 c). Los consejos comunitarios afrocolombianos y la comunidad indígena Awá son los más afectados (DRC 08/04/2025).

El uso de artefactos explosivos por parte de los GANE ha contribuido a la recontaminación de áreas previamente declaradas libres de minas. Aunque Ipiales fue declarado libre de minas en 2021, los datos oficiales registraron tres eventos por MAP/MSE en 2025 y dos en el primer semestre de 2026, ya que los GANE buscan asegurar rutas estratégicas para sus economías ilegales y restringir los movimientos de los rivales (EIC 04/09/2026 c; AICMA 31/07/2026; UIAP 07/10/2021).

El uso de AEI aumentó marcadamente en los municipios analizados, con eventos reportados que pasaron de uno entre enero y julio de 2025 a 16 en el mismo periodo de 2026. Tumaco concentró diez eventos, seguido de Barbacoas (tres), Ipiales (dos) y Cuaspud (uno). El incidente más letal ocurrió en Tumaco en enero de 2026, cuando una explosión causó la muerte a al menos a siete personas e hirió a ocho (OCHA consultado 19/08/2026).

Los explosivos lanzados por drones son un riesgo emergente en el territorio. A nivel nacional, los eventos reportados que involucran estas armas aumentaron un 146% entre enero y mayo de 2025, con cinco eventos registrados en Nariño (ACLED 27/08/2026; UNMAS 18/06/2026). En los municipios analizados, estos ataques se han registrado en Tumaco e Ipiales (ACLED consultado 07/09/2026; UNMAS 18/06/2026). Aunque los datos cuantitativos disponibles son insuficientes para establecer una tendencia clara, las entrevistas indican un uso más frecuente en ambos municipios (EIC 24/08/2026; EIC 04/09/2026 c). La falta de precisión de los drones armados genera riesgos para la población civil y la infraestructura cercanas, particularmente cuando la carga explosiva reduce la maniobrabilidad del dron (EIC 04/09/2026 b; UNMAS 24/04/2026).

Explotación sexual y trata de mujeres y niñas

En todo Nariño, los GANE usan cada vez más la violencia sexual como un instrumento deliberado de control social. Entre abril y junio de 2025, el 66% de los incidentes de VBG registrados por los hogares en Nariño fue atribuido a miembros de los GANE, lo que refleja un viraje más amplio hacia la violencia selectiva y coercitiva en lugar de la confrontación directa (DRC 14/08/2025; ACAPS 05/09/2025). Esto recae con mayor fuerza sobre las niñas y las adolescentes y sigue presentando un amplio subregistro.

La explotación sexual y la trata se concentran en Barbacoas, Ipiales, Tumaco y en la frontera con Ecuador, sostenidas por la pobreza, el control armado y el debilitamiento de la capacidad de protección (DRC 19/02/2026). En 2025, las autoridades de Nariño registraron 15 casos de trata que involucraron a 30 sobrevivientes, concentrados en Ipiales y Tumaco; a nivel nacional, el 79% de las víctimas identificadas en el primer semestre de 2025 eran mujeres, y el 43.7% de los casos involucró un esquema transnacional más allá de Colombia (Gobernación de Nariño 19/04/2026 y 08/08/2025).

Los NNA afrontan un impacto desproporcionado. La explotación sexual se concentra en los municipios afectados por los GANE y las economías ilegales, y afecta de manera desproporcionada a las niñas en Barbacoas, Magüí Payán, Olaya Herrera y Tumaco, incluida la coerción documentada para el intercambio de menores de edad por parte de familias en situación de desesperación económica (DRC 19/02/2026; Gobernación de Nariño 30/04/2026; EIC 02/09/2026). Se imponen uniones tempranas que involucran a niñas desde los ocho años, entendidas como la relación entre una persona menor de edad y una persona adulta mediada principalmente por la coerción, percibidas en muchos casos como la única protección de los NNA frente al reclutamiento o la violencia armada (El Congreso de Colombia 13/02/2025; DRC 19/02/2026). Esta situación también se ha observado en las provincias fronterizas de Ecuador (EIC 02/09/2026; EIC 08/09/2026).

La transición de los GANE de la coca a la minería de oro ha incorporado el trabajo sexual forzado y la servidumbre doméstica dentro de los campamentos mineros, con la participación de adolescentes y violencia sexual vinculada al reclutamiento (EIC 02/09/2026; HRW 19/08/2026). En zonas bajo control de GANE, hombres adultos vinculados a la minería ilegal y a los cultivos de coca negocian directamente con las familias el acceso sexual a niñas y adolescentes. En Magüí Payán, esto afecta principalmente a niñas de 8 a 14 años. En 2025 se registraron 16 nacimientos en niñas de 10 a 14 años en Barbacoas, El Charco, Olaya Herrera y Roberto Payán, enclaves de economías ilegales conectados con las dinámicas de frontera (DRC 14/08/2025 y 19/02/2026).

La trata opera a través de redes estructuradas y transnacionales. Mediante ofertas fraudulentas de empleo y estudio, a menudo difundidas en redes sociales, estas redes captan a mujeres jóvenes, en su mayoría menores de 25 años, de Antioquia, Caldas, Cúcuta y Risaralda, y las movilizan a través de Nariño hacia Ecuador y Perú (EIC 02/09/2026; EIC 04/09/2026 b). Las mujeres y las niñas de las comunidades indígenas Awá enfrentan una mayor exposición debido a la dispersión geográfica en áreas remotas donde los GANE se disputan el control del territorio y donde además la presencia estatal es limitada. Algunas mujeres y niñas también son sometidas a

servidumbre doméstica en Ecuador (EIC 02/09/2026; DRC 19/02/2026). Los Chilcos y el puente de Rumichaca (Ipiales) funcionan como puntos clave de reclutamiento y tránsito controlados por estructuras que incluyen al Tren de Aragua y a otros GDO, junto con los pasos informales en Cuaspud (Carlosama), Cumbal, Ricaurte y Tumaco (EIC 26/08/2026; EIC 01/09/2026 b; EIC 28/08/2026 b).

Los recortes de financiación han reducido el transporte humanitario y el albergue para las víctimas de trata de personas a su mínima expresión en Ipiales, situación agravada por el limitado conocimiento de las víctimas sobre las rutas de remisión (EIC 02/09/2026). Pese al registro formal de seis casos (diez personas) de trata de personas a inicios de 2025, persiste un grave subregistro debido a la porosidad de la frontera y al miedo a las represalias (EIC 27/08/2026; Gobernación de Nariño 08/08/2025).

Albergue y medios de vida

La violencia impuesta por los GANE genera necesidades combinadas de albergue y medios de vida en todo Nariño, a medida que el colapso de la capacidad humanitaria coincide con una crisis económica prolongada, lo que deja a los hogares afectados con cada vez menos estrategias de supervivencia. La mayoría de las personas desplazadas y confinadas depende inicialmente de familiares, redes comunitarias de apoyo o espacios públicos municipales, casetas comunales y residencias escolares, que presentan grave hacinamiento, falta de privacidad y condiciones precarias de higiene (OCHA 06/11/2025 y 16/07/2026).

Los recortes de la financiación internacional han reducido drásticamente los albergues formales disponibles en el departamento: la capacidad de Ipiales cayó de ocho a dos, los cuatro albergues de Pasto cerraron por completo y la capacidad también disminuyó en Tulcán (Ecuador), lo que deja particularmente desatendidos en la región fronteriza a los hombres solos víctimas, a los migrantes y refugiados y a los adultos mayores (EIC 02/09/2026; EIC 08/09/2026; EIC 28/08/2026 a). Los albergues, colchonetas, cobijas, toldillos y menaje de cocina, junto con el apoyo técnico para espacios temporales seguros, siguen siendo necesidades urgentes, agravadas por choques climáticos recurrentes (por ejemplo, inundaciones, vendavales e incendios forestales) que destruyen viviendas y requieren kits de emergencia y planificación de evacuación (OCHA 08/08/2025; 3iS et al. 19/06/2026).

Los medios de vida se erosionan de manera similar bajo la presión armada y económica combinada. Los combates, la extorsión y la contaminación por MAP y MSE han paralizado la agricultura, la pesca, la minería artesanal y el comercio, y han forzado a las personas a abandonar tierras, cultivos, animales de cría y herramientas (OCHA 06/11/2025; DRC 14/08/2025).

Las restricciones a la movilidad impuestas por los GANE y los toques de queda fluviales impiden actividades tradicionales, como la pesca nocturna y la recolección de piangua, una actividad realizada principalmente por mujeres afrocolombianas en la costa del Pacífico, quienes por ello sufren en mayor medida esta pérdida de ingresos, mientras que la volatilidad de los precios de la coca y las disputas mineras desestabilizan aún más los ingresos rurales (DRC 14/08/2025 y 08/04/2025).

Las familias se adaptan a estas limitaciones trasladando los cultivos a áreas menos aisladas o adoptando huertas caseras, pero la pérdida prolongada de ingresos impulsa estrategias de supervivencia de crisis. D De los hogares monitoreados en Nariño entre abril y junio de 2025, el 47% reportó endeudamiento, mientras que el 37% redujo las raciones diarias de alimentos, junto con la venta de activos. Esta desesperación económica actúa cada vez más como un factor de riesgo de protección; una vez agotada la asistencia inicial de emergencia, que típicamente cubre solo 15–20 días, las familias enfrentan una presión creciente para retornar de forma prematura e insegura a áreas con enfrentamientos activos y contaminación por MAP, lo que alimenta ciclos de desplazamiento y revictimización (DRC 14/08/2025 y 08/04/2025; EIC 03/09/2026 a).

Actualmente persisten brechas de asistencia en medios de vida en áreas como insumos agrícolas, herramientas, brigadas de sanidad animal y proyectos comunitarios de producción de alimentos, así como la asistencia en efectivo multipropósito para mitigar las necesidades de emergencia y apoyar la recuperación socioeconómica local (OCHA 06/11/2025 y 05/09/2026).

Acceso y respuesta humanitaria

El acceso humanitario y la capacidad de respuesta varían entre los seis municipios analizados, ya que las restricciones de financiación humanitaria evolucionaron significativamente durante el periodo de análisis. En 2025, el desmantelamiento de USAID derivó en fuertes recortes de las contribuciones humanitarias de Estados Unidos a Colombia, lo que redujo la capacidad operativa de los trabajadores humanitarios a nivel nacional (ACAPS 16/04/2025).

En 2026 se produjo una recuperación parcial a nivel nacional, en la que Estados Unidos reanudó la financiación humanitaria canalizada a través de OCHA y se asignaron USD 195 millones a 32 proyectos con la participación de 21 organizaciones (CBPF consultado 11/09/2026). No obstante, la información sobre cómo esta recuperación se ha traducido en capacidad de respuesta específicamente en los municipios fronterizos de Nariño sigue siendo limitada (EIC 02/09/2026; EIC 28/08/2026 a).

Limitaciones al acceso humanitario

Los GANE controlan el movimiento por vía terrestre y fluvial en varias áreas rurales. En los resguardos indígenas Awá de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco, los GANE operan retenes donde inspeccionan equipajes, documentos y teléfonos para identificar personas, bienes o información de interés para los grupos. Por lo general, las personas pueden continuar su trayecto si no generan sospechas durante estos controles, pero los GANE también han impedido algunos desplazamientos sin dar una razón clara (EIC 28/08/2026 b; EIC 24/08/2026; DRC 14/08/2025). Los toques de queda también prohíben el tránsito terrestre y fluvial después de las 18:00, lo que limita la capacidad de las organizaciones humanitarias para llegar a las comunidades y entregar asistencia (EIC 24/08/2026; DRC 14/08/2025).

Los artefactos explosivos restringen aún más el acceso en áreas rurales y fronterizas. Hay presencia de MAP y MSE en las vías que conectan Barbacoas con Ricaurte y Samaniego, así como en las rutas Barbacoas–Junín y Tumaco–Junín–Ricaurte (EIC 28/08/2026 b; DRC 08/04/2025). En un municipio fronterizo, una organización que apoya la respuesta a MAP/MSE no puede realizar desminado debido al terreno difícil y a las hostilidades de los GANE. Esto limita los esfuerzos para reducir los riesgos que representan los artefactos explosivos y restringe aún más el acceso para las comunidades y el personal humanitario (EIC 04/09/2026 c).

En Ipiales, las áreas rurales de La Victoria y Jardines de Sucumbíos enfrentan hostilidades activas, re-contaminación por MAP y un estricto control de los GANE, lo que limita el acceso humanitario (EIC 04/09/2026 c; EIC 27/08/2026; OCHA 09/04/2025).

Respuesta humanitaria

La capacidad de respuesta humanitaria ha disminuido pese a que las necesidades persisten, con brechas en albergue, asistencia para migrantes y refugiados, servicios de salud y transporte humanitario (EIC 02/09/2026; EIC 28/08/2026 a; EIC 01/09/2026 a; EHP/OCHA 07/05/2026).

En Ipiales, la asistencia se concentra en el centro urbano, lo que refleja el papel del municipio como un importante punto de entrada fronterizo. Seis de los ocho albergues temporales que antes operaban en Ipiales han cerrado, lo que ha reducido la disponibilidad de servicios de albergue y protección.

Los migrantes y refugiados también cuentan con información limitada sobre la asistencia disponible, ya que los mecanismos para comunicar dónde y cómo buscar apoyo son débiles (EIC 02/09/2026). El transporte humanitario para trasladar a las personas lejos de la frontera ha cesado casi por completo, mientras que la asistencia alimentaria también ha disminuido sustancialmente (EIC 28/08/2026 a; EIC 02/09/2026). Los colombianos pueden enfrentar limitaciones adicionales, ya que la asistencia humanitaria restante en los municipios fronterizos se enfoca cada vez más en las comunidades migrantes y refugiadas (EIC 01/09/2026 a).

En Ricaurte, las limitaciones para el desminado restringen la respuesta en gran medida a la educación en el riesgo de MAP y a la asistencia a víctimas (EIC 04/09/2026 c). Las organizaciones también prestan servicios de salud y protección de la niñez, pero operan bajo condiciones de seguridad muy volátiles (OCHA 30/03/2026). Tumaco tiene la respuesta humanitaria más amplia entre los municipios analizados, con ONG que prestan servicios de protección, WASH, salud y educación (EIC 27/08/2026).

PERSPECTIVA

Durante los próximos seis meses, se proyecta que la crisis humanitaria en la frontera entre Nariño y Ecuador se deteriore, en función de la probable respuesta de los GANE al viraje del nuevo gobierno nacional hacia un enfoque de seguridad de corte militar desde su posesión el 7 de agosto de 2026. La nueva administración puso fin al marco de negociación de la Paz Total y viró hacia un enfoque de seguridad que antepone la presión militar al diálogo con los grupos armados (ET 05/09/2026).

Aún no está claro cómo se materializarán estas medidas, ya que no se dispone de un cronograma detallado de implementación; sin embargo, las negociaciones con Ecuador y Estados Unidos sobre cooperación antinarcóticos ya están en marcha, y el Gobierno revocó a finales de agosto de 2026 la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, con planes de reanudar la fumigación usando bioherbicidas para cumplir con los fallos de la Corte Constitucional (Infobae 28/08/2026; EE 16/09/2026). Con el marco de negociación desmantelado, es probable que la competencia entre los GANE recién llegados y los grupos que antes estaban en conversaciones intensifique el desplazamiento, que ya continuaba con menor visibilidad durante las negociaciones, con un resurgimiento esperado en los territorios Awá, el pueblo ya más afectado. Se espera que el desplazamiento individual se mantenga alto en todos los escenarios en las zonas rurales de Barbacoas y Ricaurte (EIC 27/08/2026; EIC 28/08/2026 b).

El fin del diálogo, combinado con la reanudación de la aspersión aérea sobre los corredores cocaleros de Nariño y Putumayo ya disputados por la minería de oro y el tránsito de cocaína, probablemente intensificará las disputas territoriales a medida que los grupos defiendan cultivos y rutas frente a la fumigación y a la expansión de los rivales. La aspersión también puede dañar los cultivos lícitos cercanos y exponer a las poblaciones a riesgos de salud, añadiendo presiones sobre los medios de vida y la protección en áreas con limitada presencia estatal (Uniandes 18/12/2020; La Silla Vacía 11/09/2025).

Esta confrontación se ve agravada por el estrechamiento de la cooperación bilateral antinarcóticos. La descertificación del desempeño antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos en septiembre de 2026 y el refuerzo de la coordinación militar entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos señalan un posible aumento de fuerzas militares conjuntas en la frontera, lo que mantiene una presión externa ante la cual es poco probable que los GANE cedan; en cambio, podrían responder con una escalada de la violencia, incluido el uso de AEI lanzados por drones (Infobae 28/08/2026; EE 16/09/2026). Se espera que esta escalada se concentre en Tumaco e Ipiales, donde ya se registran este tipo de ataques (3iS et al. 11/08/2026).

Las dinámicas complejas de movilidad agravarán la crisis. Un flujo creciente de familias ecuatorianas y hogares binacionales que huyen de la violencia y la extorsión llega a centros urbanos de Nariño, como Ipiales y Tumaco (Migración Colombia 15/07/2026). Simultáneamente, la población civil colombiana continuará buscando protección internacional al otro lado de la frontera ecuatoriana. Es poco probable que unos controles fronterizos más estrictos detengan estos flujos; por el contrario, pueden desviar los cruces hacia rutas informales más peligrosas, lo que aumentaría la exposición a las redes de trata, particularmente para las mujeres y las niñas.

Entre finales de 2026 e inicios de 2027, se proyecta que El Niño agrave las condiciones humanitarias. En los ecosistemas andinos de Nariño, los déficits severos de lluvia y las altas temperaturas pueden empeorar la escasez de agua y desencadenar incendios forestales (3iS et al. 19/06/2026). Las áreas fronterizas costeras y amazónicas, en cambio, enfrentan inundaciones y aumento del nivel del mar. El mayor riesgo se ubica donde los choques climáticos se superponen con disputas armadas activas, como en la zona rural de Tumaco y las áreas mineras de Cumbal, lo que deja a las comunidades expuestas a dos crisis simultáneas con una capacidad reducida de respuesta.